

MÍNIMOS FUNDAMENTALES PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DEMOCRÁTICOS

Gabriela Williams Salazar*

Sumario: I. Introducción; II. Bienestar y democracia; III. Democracia participativa; IV. Participación ciudadana y reducción de las desigualdades; V. Retos de la participación ciudadana en la reducción de las brechas de desigualdad; VI. Conclusiones; VII. Fuentes consultadas.

I. Introducción.

El crecimiento económico se determina según la capacidad de un Estado para generar riqueza, lo que a su vez se traduce en poderío económico; sin embargo, en países desarrollados se ha fomentado la idea de que los gobiernos deben buscar la felicidad de su población y poner en segundo lugar el crecimiento económico, lo cual resulta lógico cuando el segundo ha sido una constante.

Esto, implica que la producción de bienes y servicios se encuentre vinculada a mayor poder del Estado y bienestar de la población. En este sentido, el concepto de bienestar, se explica a partir de varios factores, pues engloba las vertientes materiales que incluyen la riqueza, las físicas y psicológicas, ligadas en buena medida a la salud y felicidad, la educación, así como la posibilidad real de participar en la sociedad a través de la democracia y el estado de Derecho, sin dejar de mencionar las variables comunes de los estudios demográficos como lo es la situación laboral y el estado civil.

En los países en vías de desarrollo, cuando se logra un crecimiento económico, surgen diversos fenómenos que impiden a la población salir de situaciones de vulnerabilidad de manera uniforme y constante, generando desigualdades importantes entre los sectores poblacionales.

* Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correo electrónico: cegws@iedf.org.mx

Hasta 2011, nuestro país ocupaba los mejores puntajes en mediciones de percepción de bienestar poblacional por el Índice para una Vida Mejor (BLII), reportando una calificación de 8.2, en contraste con las cifras presentadas en 2016 que reflejan con un 6.2 la satisfacción general ante la vida de las personas encuestadas, siendo este porcentaje menor a los otros países de la OCDE.

Lo anterior, debido a que la relación del PIB con el bienestar, tiene un límite que se explica una vez pasando la línea de miseria, pues si tuviéramos en consideración esta variable, no se explicaría que en la medición Mundial de la Felicidad de 2016, México ocupe el lugar 25 de 155 países del mundo. Lo anterior impulsa a incluir en el análisis el nivel de distribución de ingresos.

La influencia de este tipo de mediciones ha tomado relevancia para dirigir las acciones gubernamentales hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así asegurar la prosperidad de las personas (WH, 2015), a fin de implementar las políticas públicas que permitan fortalecer el tejido social a favor de la cooperación y el saneamiento nacional.

Y ¿cómo crear políticas públicas en una sociedad igualitaria que comparte condiciones tan disímiles entre sí? En este caso se plantea que la democracia participativa introduce los elementos que permite a las personas en igualdad de condiciones por cuanto a voz y voto, tomar parte en las decisiones públicas, dado que la condición subyacente es la desigualdad.

De ahí, la importancia de la participación ciudadana en una democracia que permita que las voces de la ciudadanía sean tomadas por igual, a fin de tener voz en los asuntos públicos, que promuevan mayores resultados en la vida cotidiana de las personas. Así, entre mayor participación ciudadana, mayor bienestar y, por ende, reducción de la desigualdad.

II. Bienestar y democracia.

El concepto de bienestar está ligado a la calidad de vida que puede tener una persona, lo que la OCDE ha identificado como las condiciones materiales y subjetivas para mantener una percepción de vida idónea, lo cual cambia de país en país, debido a los contextos sociales y culturales que envuelven las condiciones del mismo, pues las prioridades para tener una buena vida varían según su latitud.

Para ejemplificar lo anterior, en España se considera la salud como tema prioritario, en Ucrania el ingreso y en México la educación (El País, 2016), siendo nuestro país, junto con Sudáfrica y Turquía, los que aparecen en los últimos lugares de la medición; cabe señalar que los peores puntajes son en educación, seguridad y ayuda a la comunidad.

Este índice compuesto por 11 temas que, de acuerdo con la metodología, podrían incorporar las variables sobre la composición del bienestar humano como lo es vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad, balance de vida y trabajo, refleja lo que las personas perciben en la vida cotidiana. Esto, es porque los componentes en lo individual no forman una aproximación ideal para medir el bienestar de los habitantes de un país.

A partir del año 2000, México ha reducido la disparidad entre los Estados que lo conforman, destacando los temas de salud, accesibilidad a servicios básicos y vivienda de calidad (OCDE, 2015); sin embargo, aún subsisten las mismas dimensiones de seguridad, servicios y empleo. En este sentido, cabe mencionar que existen desigualdades a nivel regional que distan mucho de lo que son las condiciones de un estado y otro; ejemplo de ello, la calidad de vida de la Ciudad de México y la de Chiapas.

Ahora bien, los índices de bienestar y democracia están íntimamente ligados, en tanto una sociedad con altos niveles de desigualdad y exclusión estaría fomentando relaciones sociales y políticas débiles. Esto es así, porque el bienestar implica que en una sociedad igualitaria existe mayor dificultad para capturar voluntades asociadas con el clientelismo, evita respaldo a métodos y prácticas autoritarias que son consecuencia de las asimetrías del poder y previene la concentración del mismo, ya sea por ausencia o por desmontaje de la institucionalidad (Cabezas & D'Elia, 2007).

Por un lado, a pesar de que materialmente existe una mejora en el bienestar de los países, también es verdad que no se reporta una reducción real de la pobreza; esto adquiere sentido si se toma en consideración que los países pobres no han crecido más que los ricos, sino que el ingreso de algunas personas ha permitido cambiar los resultados macro de algunos países, abriendo la desigualdad distributiva.

América Latina sigue siendo la más desigual en el mundo, dado que culturalmente persisten ideas como el del control de una élite sobre la población (Elizondo, 2011). En el caso de México, la desigualdad distributiva, incluso en los años de desarrollo estabilizador en los que tuvo números decrecientes, se mantuvo elevada y, al crecer de forma sostenible, provocó una de las grandes crisis que tuvo como resultado la ampliación de las brechas de desigualdad.

Esto, en contraste con lo sucedido en países como Inglaterra, que en un periodo anterior al siglo XX era tan desigual como nuestro país; sin embargo, hubo cuatro factores que permitieron una mayor distribución del ingreso entre la población: el sufragio universal para hombres y mujeres mayores de treinta; la crisis económica de la década de los 30; el surgimiento de impuestos progresivos; y, por último, la implementación del Estado de Bienestar.

Se asocia pues, que los procesos democratizadores se encuentran vinculados con altas tasas de crecimiento, pues implican cambios demográficos, políticas públicas tendientes a proporcionar una mayor educación y, por tanto, una mejor distribución del ingreso, permitiendo la reducción de la brecha de desigualdad distributiva.

Según Elizondo (2011), la desigualdad en nuestro país se ha sostenido desde 1950 y es similar a la de 1870, ya que se han mantenido las brechas de control de activos productivos. Para ejemplificar lo anterior, basta con mencionar que el cuarto hombre más rico del mundo (Forbes, 2016) es mexicano y, en conjunto con los otros tres hombres más ricos del país, concentran el 9.5% del PIB; es decir, el 1% de la población posee el 43% de toda la riqueza en México (IMCO, 2016).

Lo anterior en contraste con los 55.3 millones de personas que viven en pobreza extrema, siendo el sector de la población hablante indígena la que concentra estas cifras, lo que demuestra que no solo el proceso de exclusión se origina por falta de oportunidades laborales, sino que también por discriminación.

El elemento racial en nuestro país adquiere mayor significado cuando entre individuos del mismo nivel educativo, la persona indígena gana menos, en tanto que en países con mayor homogeneidad étnica enfrentan menores tasas de desigualdad, tal es el caso de Japón o Corea (Elizondo, 2011).

Desde 2008, se observa una caída en los ingresos de los hogares y, por cuanto hace al salario mínimo, este se encuentra por debajo de la línea de bienestar, originando que 23 millones de personas no puedan comprar una canasta básica. Esto sitúa a México en el 25% de los países más desiguales en distintas mediciones (Esquivel, 2015) y de 2012 a 2015 se incorporaron cerca de 2 millones de personas, siendo los estados del sur los que mayor desigualdad reportan.

En la misma situación se encuentran otros países latinoamericanos con respecto a la distribución del ingreso, por lo que es posible que existan posturas ambivalentes con respecto a la democracia y al autoritarismo (Cabezas, F & D'Elia, 2007), pues las sociedades igualitarias no están dispuestas a ceder los derechos adquiridos para otorgarlos a un régimen autoritario. De ahí, que la democracia electoral vista desde una perspectiva estricta, no necesariamente conduce a la estabilidad democrática.

Sin embargo, las libertades económicas y la solidaridad social tienen como condición necesaria las libertades políticas. En perspectiva de Aguilar (2013), el autoritarismo político es sostenible hasta cierto punto en sociedades cerradas, frente a los reclamos de libertades individuales en una sociedad abierta.

Derivado de ello, democracia y bienestar tienen una relación directa en los procesos de consolidación democrática, pues los niveles de desigualdad y exclusión serían reflejo de la debilidad institucional.

En este sentido, el bienestar es el que aporta los componentes que permiten la estabilidad, en razón de que produce integración social y crecimiento económico, dada la cohesión y el progreso que permiten un avance; por el contrario, si esto se frena, se acumulan las desigualdades (Mota, 2011).

III. Democracia participativa.

La importancia de la democracia en la capacidad para que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos es de vital importancia para la recuperación de la confianza, no sólo a nivel personal, sino que también hacia las instituciones; como se ha demostrado anteriormente, se busca incidir en la percepción de la población para mantener un sentido de comunidad y pertenencia que promueva la solución de las carencias desde un nivel micro para llegar al ámbito de acción macro.

Esto es porque el concepto tradicional de democracia, entendida como un sistema de gobierno que se traduce en la estructura electoral que busca la renovación de los poderes, se ha vuelto obsoleto para las demandas ciudadanas, de ahí que se busca facilitar una participación política de la ciudadanía activa, mediante el diálogo y el diseño e implementación de políticas públicas que busquen una economía productiva y una sociedad saludable. En una interpretación radical: asegurar que la ciudadanía beneficie a la riqueza de la nación.

Al respecto, cabe señalar la concepción de Adela Cortina (2006) sobre ciudadanía activa que está relacionada con la disposición de las personas para reclamar sus derechos, ejercerlos y comprender la responsabilidad de su ejercicio mediante la participación activa en común, lo cual necesariamente evoca al ideal ateniense fundamentado en la reflexión. Así pues, la posibilidad de la realización efectiva de los derechos y no sólo la incorporación de estos en los marcos legales, es lo que se define como una ciudadanía plena, contraponiéndose con el término déficit de ciudadanía (Moreno citado por Álvarez, Padilla, Díaz, Barrera, Arengas, Giraldo & Cantillo, 2014) que refiere a la situación en la que se tiene un derecho, pero sus beneficios no son alcanzables.

Al respecto, la Teoría de Marshall explica la integración plena de la ciudadanía, pues desde su punto de vista es necesario integrar la ciudadanía civil, la política y la social (económicos, laborales y culturales) al ejercicio de los derechos vinculados con cada una; es decir, a la primera los derechos y libertades individuales, la segunda a los derechos políticos y la tercera a los derechos económicos, sociales y culturales.

Esta misma teoría se refuerza con lo presentado por Smith, Lister, Middleton & Cox (citados por Benedicto 2016) en el que el reconocimiento social e institucional de la persona como ciudadana descansa en el hecho de la

capacidad de integración social a través del trabajo y la independencia económica. Así pues, delimitan cuatro rasgos que llevan aparejados la definición del ideal de ciudadanía; el primero de ellos, retoma la participación de la persona en el ámbito económico de la comunidad para poder recibir las prestaciones tales como seguridad social, pensiones y prestaciones sociales, de ahí que el trabajo como derecho, también es visto como obligación para poder ser acreedor de otras prerrogativas.

Estos derechos son reconocidos por la autoridad como expresión de su pertenencia a la colectividad; es decir, es el Estado el ente que reconoce y otorga derechos, siendo el segundo rasgo del modelo planteado (Barrera, 2012). El tercero, es el cumplimiento de deberes definidos por el Estado mediante el marco jurídico, que refuerzan la “dimensión vertical de la relación”, como lo es el de ejercer el voto; y, el cuarto es el relativo a los vínculos del ciudadano que le permite participar en los asuntos colectivos.

Así, el comportamiento adecuado de la persona para hacer posible la civilidad en la vida comunitaria, bajo los principios de bienestar considerados en el consenso comunitario, requiere de elementos objetivos, relativos a los actos en los que interviene la persona y los subjetivos, ligados a los valores legales y morales de la comunidad. En suma, la conducta de la persona en un grupo social está relacionada con los contenidos éticos y morales que igualmente evolucionan de sociedad en sociedad.

Así, se deja atrás la concepción del Estado democrático afirmativo, que tiene un rol creativo y activo en la solución de problemas como respuesta a demandas populares (Fung&Wright, 2010), pues se aspira a que la gente común pueda tomar decisiones inteligentes a través de decisiones razonables y con poder de decisión, refiriéndose a la unión de la discusión, lo cual puede enfrentar obstáculos tales como la fragilidad de las condiciones políticas y culturales, la tendencia de la desigualdad

económica y social, así como una débil garantía de protección de las minorías.

En primer término, identificamos a la deliberación que se extiende al ámbito de problema de los conflictos de valores y los principios de justicia hasta aterrizar a asuntos concretos vinculados con la cotidianidad, como lo son las condiciones urbanas en los entornos inmediatos de las personas. También, se refiere al debate deliberativo que en la práctica permite organizar la experiencia social que permita profundizar en el entendimiento de nuevas estrategias que mejoren su calidad.

Igualmente, encontramos la justificación de la importancia en la vida cívica y de las organizaciones no gubernamentales para una democracia vigorosa. Este enfoque permite que el Estado reorganice a las instituciones formales para estimular una participación democrática de la sociedad civil, para lo cual crea un círculo virtuoso de refuerzo recíproco.

El sentido de justicia en la democracia participativa se torna primordial, dado que en los procesos de deliberación se promueve la equidad y la justicia social al incluir a las personas a las cuales se focaliza la decisión pública, incorporando a todos los estratos sociales y económicos, los cuales sistemáticamente son excluidos de la toma de decisiones, fomentando la inclusión.

Los grupos toman decisiones con las reglas de la deliberación, donde la razón es lo que debe permear sobre el dinero o poder, en un contexto de corresponsabilidad social, de ahí los tintes altruistas que adquiere esta metodología.

Se promueve la participación derivado de canales adicionales de expresión sobre asuntos que genuinamente interesan y ofrecen una alternativa a los canales convencionales como lo es el trabajo de grupos de presión y

contacto con funcionarios. La frase: “Las capacidades de la ciudadanía para deliberar y arribar a decisiones públicas se atrofian si no se usan”, tienen todo el impacto para ejemplificar que este tipo de métodos permiten a la ciudadanía desarrollar y desplegar capacidades políticas pragmáticas.

Este primer componente, relativo a la deliberación, se resume en el “cómo”, pues de esta forma las personas se forman y, en alguna medida, se transforman a través del diálogo, generando una solución que va más allá de las satisfacciones e intereses individuales (Alarcón, Font & Madrid, 2015). Ahora bien, el segundo componente es el “para qué”, vinculado a la capacidad para transformar el entorno; es decir, la afectación de esa deliberación traducida en acción pública (Fung, 2003 citado por) y que se engloba en el término empoderamiento.

Dicho empoderamiento necesariamente se traduce en acción, cuyos resultados necesariamente impliquen el bienestar colectivo e individual; pero, para que esto suceda, se necesita la expansión de la libertad de elección y de acción (Deepa, 2002), a fin de tener individuos y grupos que adquieran la posibilidad de combatir los niveles desiguales de implicación política.

Al respecto, el involucramiento de la ciudadanía en estos ejercicios, estimula el desarrollo de la sabiduría política y la capacidad de ser partícipes de las mejoras de sus capacidades, si sus habilidades están involucradas en el conocimiento práctico; añadiendo a lo anterior procedimientos para introducir las habilidades básicas, con el objeto de que los participantes carentes de ellas adquieran las necesarias y potencien sus capacidades políticas y técnicas; es decir, un desarrollo integral.

IV. Participación ciudadana y reducción de las desigualdades.

La desigualdad económica es vista como un factor de amenaza en la estabilidad gubernamental, además de la legitimidad del sistema democrático, ya que solamente se favorece a un grupo por sobre otro, lo que puede acarrear mayores índices de delincuencia, menor esperanza de vida, mayores niveles de mortalidad infantil y bajos niveles de confianza; por tanto, un crecimiento sostenible sólo es posible si es equitativo (Oxfam, 2014).

En este sentido, la participación ciudadana permite que las personas tomen acción en la reducción de los niveles de desigualdad, al modificar los patrones de conducta entre la sociedad y las instituciones, entendidas estas últimas como reglas o conductas que se convierten en patrones (Deepa, 2002). En su vertiente formal se encuentra el Estado, la sociedad civil, las instituciones internacionales y el sector privado; dentro de las informales se encuentran las normas de status superior o inferior, expectativas de soborno, redes comunitarias y el conjunto de conductas que se practican en una sociedad determinada.

Empero, si las personas se encuentran mucho más preocupadas por la satisfacción de las necesidades básicas, tendrán poco interés para cambiar la realidad colectiva, pues es lógico que después de largas jornadas de trabajo no necesariamente tengan energías para abocarse a la resolución de asuntos públicos, afectando consecuentemente la dignidad de la persona.

Es por eso que se explica la idoneidad de la existencia de grupos intermediarios de la sociedad civil para traducir, interpretar y vincular las necesidades de los grupos vulnerables ante el Estado, pues estos pueden acercar la información y herramientas necesarias para empoderar a las personas, para lo cual se identifican cuatro elementos (Deepa, 2002):

acceso a la información, inclusión y participación, responsabilidad social o rendición pública de cuentas, y capacidad organizacional local.

Por cuanto hace al acceso a la información, se considera de relevancia primigenia debido a que una persona que conoce las oportunidades a las cuales puede acceder, es capaz de ejercer sus derechos y por tanto adquiere con el tiempo la capacidad de negociar y responsabilizar al Estado de sus acciones, la exigencia ciudadana encuentra fundamento en éste elemento al brindar el status real en que se encuentra la sociedad.

En relación a la inclusión y participación de sectores que tradicionalmente no se involucran en la toma de decisiones, implica el mejor aprovechamiento de los recursos públicos, pues si se parte del hecho de que el Estado tiene recursos limitados y es deber del mismo maximizarlos, el que las personas objeto de la política pública estén incorporadas en la toma de decisiones, permite que los esfuerzos redunden en mejores resultados.

De ahí, que el actuar del servicio público debe estar dirigido al bien común, evitando el beneficio privado, por lo cual la responsabilidad juega un papel sumamente importante en la administración de los recursos públicos, pues los sectores menos favorecidos son los que tienen menor probabilidad de acceso a servicios y si estos se concentran en un grupo, es muy difícil superar las brechas de desigualdad.

Y, por último, el componente de la capacidad de organización local, que implica que entre mejor organizada se encuentre una comunidad es mucho más probable que sea escuchada y por tanto sus demandas sean atendidas, para lo cual las asociaciones, redes y demás actores de la sociedad civil influyen en la toma de decisiones.

En consecuencia, el empoderamiento de la ciudadanía es un proceso que lleva tiempo para que los sectores que la conforman tomen conciencia del

poder de acción que tienen frente al gobierno; muestra de esto son los cambios en la consolidación de las instituciones públicas al lado de la comunidad integrada por centros de conocimiento, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en la construcción de un sistema de rendición de cuentas (Merino, 2012).

Otra consecuencia es que los procesos de participación que fomentan decisiones públicas también tienden a reforzar los derechos y deberes sociales, dado que los derechos permiten incrementar la equidad y la eficiencia de las decisiones públicas y los deberes ponen en movimiento la noción de una ciudadanía políticamente activa y crítica (Cunill, 2004). La igualdad y el compromiso político son requisitos *sine qua non* de la participación política, pues el peso de los sujetos debe ser de forma igualitaria para no corporativizar el proceso de decisión o representar intereses individuales.

De ahí que para modificar los patrones de conducta a nivel formal e informal se requiere un cambio en la demanda, lo que se traduce en personas mucho mayor informadas y saludables, para poder involucrarse de manera más activa en los asuntos de su comunidad.

V. Retos de la participación ciudadana en la reducción de las brechas de desigualdad.

La participación ciudadana, vista como el eje de prácticas políticas que permiten a la ciudadanía intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de espacios que promueven el debate, decisión y vigilancia de políticas públicas, puede ser confundida con formas de democracia directa, relativas a las iniciativas populares, referéndums y plebiscitos (Olvera, 2009).

Lo anterior acarrea problemas en la delimitación conceptual, además de la operatividad de los mismos, pues estos no pueden ser ejercidos salvo condiciones políticas muy particulares, que no dejan de ser medidas para legitimar acciones de gobierno o liderazgos, situación que se replica en todo el mundo.

Empero, en México, al haber esta confusión conceptual, la participación ciudadana se limita a la utilización de los mecanismos de democracia directa, sin tener una cultura de involucramiento ciudadano, ya que, usualmente, los espacios participativos están pensados para los sectores más organizados de la sociedad, siendo que se busca satisfacer a aquellos más interesados en temas particulares, que llegar a toda la población (Alarcón, P., Font, J., & Madrid, E., 2015). En otras palabras, la movilización se centra en los grupos más participativos y deja de lado a los sectores tradicionalmente excluidos de las políticas públicas, para lo cual debe asegurarse que participan de manera igualitaria y no en estado de subordinación.

Un área de oportunidad para incluir a la ciudadanía es la toma de decisiones con respecto a los servicios fundamentales (Olvera, 2009), pues podría integrarse un consejo que represente los intereses colectivos, con otra parte que tenga la capacidad técnica para tomar las mejores decisiones con respecto a las políticas públicas que afectan a una comunidad y que implica la creación de nuevos espacios que tengan capacidades de decisión, control y evaluación.

Para que esto suceda, se debe pensar en el ámbito local, pues es donde las relaciones entre gobierno y sociedad resultan mucho más próximas (Ziccardi, 2004), pues la ciudadanía se familiariza con las reglas del juego democrático y adquiere las competencias necesarias para la vida en comunidad; sin embargo, esto conlleva la necesidad de capacitar a los

representantes ciudadanos y a la ciudadanía para participar de una forma mucho más democrática.

Muestra de lo anterior es que las bases de la identidad grupal en México, devienen de la territorialidad, las condiciones socioeconómicas, intereses como las actividades ambientales, culturales y recreativas, que comienzan en los núcleos sociales comunitarios y que, a últimas fechas, se pueden incluir dentro de las redes sociales, pero que no se han podido integrar dichas formas de agrupación en la planeación gubernamental.

Entre las actividades comunitarias, destacan las formas de solidaridad como la construcción de vivienda, la salud reproductiva, la faena o el tequio; pero estas formas de participación en ocasiones se han desvirtuado, ya que se han visto capturadas por el clientelismo, a partir de programas sociales para abatir la pobreza, tales como Solidaridad, Progresá, Oportunidades y Prospera; para lo cual es un requisito la participación ciudadana de forma institucionalizada, fuertemente centralizada y sin participación de autoridades locales y comunidades, tanto en el diseño como en la aplicación.

Es así, que en los gobiernos subnacionales es donde se debe incentivar la participación de la ciudadanía (Avendaño, 2011), pues las políticas públicas locales son las que generan mayor impacto en la percepción de la calidad de vida; y, para que verdaderamente se representen los intereses comunitarios, se debe invertir en el cambio de reglas para que estas promuevan un mayor dominio de la acción pública, sobre todo cuando factores como la migración, la violencia o inclusive las mismas políticas, minan la organización ciudadana.

De ahí, la necesidad de formar y capacitar a las personas involucradas, autoridades y comunidad, para poder incidir en la transformación de la realidad ciudadana y no limitarse a convocar/asistir a las asambleas

públicas, con la finalidad de lograr más autonomía en las decisiones y evitar la vinculación a organizaciones o partidos políticos.

El ideal es crear una cultura democrática, que permita vincular el bienestar colectivo con las decisiones que deriven de la participación ciudadana efectiva de procesamiento y cooperación social, evitando las prácticas clientelares que se basan en la atención a las demandas de algunos grupos de presión, lo cual no ha permitido reducir la brecha de desigualdad en nuestro país.

Así pues, cuando la ciudadanía debe tomar una decisión que impacte su entorno, se vuelve imperante el acceso a la información sobre el contenido, alcance y resultados de sus decisiones, pues en ocasiones la desinformación y la complejidad técnica direccionan el sentir de las personas. En este sentido, Ziccardi (2004) ejemplifica consultas ciudadanas sobre obra pública como el caso de Tijuana (que se trata de un hecho aislado) que han sido exitosas, pero también alude a casos no exitosos por falta de información y desconfianza en las autoridades, como es el caso de las políticas urbanas en la Ciudad de México. De igual manera surge indispensable el cumplimiento Estatal para satisfacer necesidades básicas que rompan con el potencial de riesgo de condicionar la autodeterminación a cambio de la distribución de bienes y servicios fundamentales.

Ahora bien, no sólo se trata de incorporar a la ciudadanía en el diseño de las políticas sociales, mediante la creación de comités de expertos en temas específicos; sino que se trata de ampliar la participación de la ciudadanía en el diseño, aplicación y monitoreo, siendo uno de los precedentes el grupo de reconstrucción urbana a partir del sismo de 1985.

No se trata de un gobierno irresponsable que se exime de sus responsabilidades o por otro lado en un afán de realizar políticas distributivas, conducir a un gasto enorme que a la postre descuide los costos

de la gestión pública, pues en el pasado nos ha llevado a crisis financieras (Aguilar, 2013). Ni tampoco el empleo de intermediarios, que lejos de dotar de competencias a la ciudadanía, subordinen la obtención y acceso a los programas; alejado de ello, se alude a un verdadero compromiso para involucrarse en lo público, buscando un beneficio colectivo, se trata de una verdadera participación ciudadana responsable.

El reto mayúsculo es introducir a la sociedad elementos críticos y propositivos en la búsqueda de soluciones para abatir las desigualdades como parte de la agenda pública, en la que todos los sectores de la población se involucren en la reducción de la pobreza, por un lado la sociedad civil organizada puede ser parte del diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, incorporando a los sectores menos privilegiados para dotarlos de las capacidades de deliberación y empoderamiento, necesarias para exigir y ejercer sus derechos.

Esto permitirá crear políticas públicas dirigidas a incrementar la igualdad entre los miembros de la comunidad, al respecto Oxfam (2014) asegura que la incorporación de la sociedad en las políticas permite mayor gobernabilidad y para ello cita el ejemplo de Islandia, que después de la crisis económica de 2010, da apertura a su ciudadanía en la construcción de la Constitución, mediante la elección de ciudadanos al azar para instaurar un foro inicial y posteriormente celebrar elecciones, a fin de crear un consejo constitucional, así como la publicación en medios electrónicos y redes sociales de la Constitución, con el objeto de que todas las personas pudieran expresar sus comentarios al respecto.

Este ejemplo sirve para ilustrar la participación ciudadana a partir de la creación de un sistema político y económico que permite equilibrar la condición de vulnerabilidad de algunos sectores de la población desde el diseño hasta la toma de decisiones.

Para el caso, en la Ciudad de México nos encontramos ante una oportunidad de oro en la construcción de ciudadanía, que no debe ser desperdiciada, pues se debe dotar a la población de las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía participativa a la que se aspira, donde el gobierno y toda la población trabajen para el bienestar generalizado.

Lo anterior, mediante la incorporación de la población en la toma de decisiones, con objetivos claros, así como la puesta en marcha de mecanismos de representación y supervisión ciudadana en los procesos de planificación, elaboración presupuestaria y la aprobación de normas.

VI. Conclusiones.

El ciclo entre la desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza (Esquivel, 2015) resulta inercial, en la medida en que nuestro país no ha podido eliminar las brechas de desigualdad arraigadas desde hace años y que se recrudecen con las recientes crisis económicas; sin embargo, es posible que, mediante la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, se reduzcan las brechas de desigualdad.

Así pues, la integración permite la expansión de los derechos a partir del acceso a bienes y servicios, asociatividad y participación, lo que traslada los bienes colectivos en propiedad de la ciudadanía y de alguna forma evita las conductas arbitrarias o clientelares del Estado. De ahí, la importancia de uno de los componentes del empoderamiento ciudadano, relacionado con el acceso a la información, pues al ser los bienes colectivos sometidos a reglas de igualdad y a la vista de todos (Cabezas & D'Elia, 2007), debilita las prácticas informales con tinte individualista.

En este sentido, los grupos intermediarios deben ser garantes de que las demandas ciudadanas sean realmente expuestas y tratadas de manera tal

que permita que los grupos excluidos tengan acceso a servicios y oportunidades, así como ser facilitadores para que estos grupos adquieran nuevas capacidades para eliminar barreras discriminatorias; de tal suerte que, exista capital social “puente” que incremente la interacción entre estos grupos (Deepa, 2002).

Sin embargo, una vez que los grupos excluidos adquieren las capacidades necesarias, es de suma importancia que se vinculen en los procesos de deliberación de los asuntos públicos, a fin de que las decisiones que los involucran sean para lograr mejores resultados y no sólo dispendio público.

De igual manera, es oportuno señalar la imperante necesidad del cumplimiento institucional para satisfacer bienes y servicios fundamentales, pues en su efectivo cumplimiento se hace posible el esparcimiento crítico de la población en un contexto de corresponsabilidad social que trascienda la crisis individualista derivada de la desigualdad.

En suma, las capacidades ciudadanas requieren el involucramiento de las personas, la inclusión y un sentido de identidad que fomente el desarrollo de la dignidad humana, lo cual permitirá que la percepción de bienestar y felicidad sean congruentes con el tipo de ciudadanía que deseamos y, en consecuencia, con una democracia plena, sustentada en mínimos fundamentales.

Fuentes consultadas.

Aguilar Villanueva, L. (2013) Gestión Gubernamental y Reforma del Estado. Gobierno y Administración Pública. Biblioteca Mexicana. Fondo de Cultura Económica. México

Alarcón, P., Font, J., & Madrid, E. (2015) Participación Ciudadana y Desigualdad. Diagnóstico y Líneas de Acción. Informe de Investigación de Oxfam Intermón. Disponible en: <http://www.iesa.csic.es/publicaciones/131020150.pdf>

Álvarez, L. Á., Padilla, A. M., Díaz, E., Alejandro Barrera, Arengas, K. S., Giraldo, M. R., & Cantillo, A. J. (2014). la participación ciudadana como ejercicio de aproximación a la construcción de cultura ciudadana en el marco del derecho y el deber*/The citizen participation as exercise of approach to the construction of civic culture under the right and responsibility. Análisis Político, 27(81), 64-79. Disponible en: <http://0-search.proquest.com.millennium.itesm.mx/docview/1660801691?accountid=41938>

Avendaño, E. & García, M (2011). Fundación Este País. Banamex. 1, septiembre 2011. Disponible en: <http://archivo.estepais.com/site/2011/la-desigualdad-lo-que-divide-a-los-mexicanos/>

Barrera, M. D. M., & Salgado, S. V. A. (2012). Ciudadanías y competencias ciudadanas*. Estudios Políticos, (40), 53-75. Disponible en: <http://0-search.proquest.com.millennium.itesm.mx/docview/1241037340?accountid=41938>

Cabezas, F. & D'Elia (2007). Democracia y Bienestar: Aportes del bienestar al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Convite, A.C. Disponible en: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05533.pdf>

Cortina, Adela (2006). Educando para una ciudadanía activa. El País. 2006, diciembre 30. Disponible en: http://elpais.com/diario/2006/12/30/opinion/1167433212_850215.html

Deepa Narayan. (2002) Banco Mundial. Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. Versión en español. Disponible en: <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/413711468766496204/pdf/248000Empoderamiento.pdf>

¿Dónde se vive mejor?(3 de junio de 2016). El País. Disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2016/06/01/actualidad/1464774908_071541.html

Elizondo Mayer-Sierra, C. (2011) *Por eso estamos como estamos. La economía política de un crecimiento mediocre*. México, D.F., Debolsillo. México.

Esquivel Hernández, G (2015) Desigualdad Extrema en México. Oxfam. Disponible en: http://cambialasreglas.org/pdf/desigualdadextrema_informe.pdf

Fung, A. & Wright, E. (2010) En torno al gobierno participativo con poder de decisión. Participación ciudadana en las políticas públicas. Siglo XXI Disponible en: http://www.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/i_pcppp_eap.pdf

Igual. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas. Oxfam. (2014) Disponible en: http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf

Merino, M. (2012). La segunda transición democrática de México: Esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas. Wilson Center. Mexico Institute. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Verano 2012. Disponible en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Transicion_Democratica_Merino_0.pdf

Mota, S. (2011). Crecimiento económico y bienestar social. El Economista. 7, abril 2011. Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2011/04/07/crecimiento-economico-bienestar-social>

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2016). Índice para una vida mejor. Disponible en: <http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/about/better-life-initiative/>

Olvera, A (2009). Un breve estudio del desarrollo de la cultura y de las instituciones participativas y diagnóstico de su problemática actual, con propuestas de hacer funcionales las instancias de participación democrática. Entregable 2 del contrato simplificado 6800002163. Disponible en:

[http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/b\)Olvera_Entregable_2.pdf](http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/b)Olvera_Entregable_2.pdf)

World Happiness Report 2015. Disponible en:
<http://www.theglobeandmail.com/news/national/article24073928.ece/BINARY/World+Happiness+Report.pdf>

Ziccardi, A (2004). Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas del ámbito social. Participación Ciudadana y políticas sociales del ámbito local. UNAM/ Indesol.
<http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4420/1/Participacion%20ciudadana%20y%20politicas%20sociales%20en%20el%20ambito%20local.pdf>